



# Asamblea General

Distr. general  
25 de noviembre de 2024  
Español  
Original: francés

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 100º período de sesiones (26 a 30 de agosto de 2024)

#### Opinión núm. 36/2024, relativa a Paul Maillot (Madagascar)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 51/8.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo<sup>1</sup>, el Grupo de Trabajo transmitió el 29 de febrero de 2024 al Gobierno de Madagascar una comunicación relativa a Paul Maillot. El 26 de abril de 2024, el Gobierno solicitó una prórroga del plazo para responder a la comunicación, que le fue concedida. El Gobierno respondió a la comunicación tardíamente, el 18 de junio de 2024. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional,

<sup>1</sup> [A/HRC/36/38](#).



étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

## 1. Información recibida

### a) Comunicación de la fuente

4. Paul Maillot (también conocido como Paul Maillot Rafanoharana) es un ciudadano malgache y francés, nacido el 2 de mayo de 1963. Es director de empresa, asesor político y antiguo oficial de la gendarmería francesa. Ha ocupado cargos políticos en Madagascar durante los últimos diez años y reside habitualmente en Antananarivo.

#### i) *Detención y privación de libertad*

5. El Sr. Maillot fue detenido el 20 de julio de 2021 en su domicilio de Antananarivo tras un registro. Según la fuente, el registro se llevó a cabo sin autorización del juez y la detención del Sr. Maillot se realizó en un idioma que este no hablaba. Tampoco se le informó de los motivos de su detención en el momento de esta. La detención se efectuó sobre la base de los artículos 206 y ss. del Código de Procedimiento Penal, relativos al delito flagrante. La fuente afirma que no se cumplían las condiciones para la aplicación de ese artículo.

6. Tras su detención, el Sr. Maillot permaneció bajo custodia policial en Ivato durante 15 días, y no fue informado de la prórroga de su detención hasta que habían transcurrido 10 días. La fuente señala que la legislación nacional limita la custodia policial a 48 horas.

7. Al término de esos 15 días de detención policial, el 4 de agosto de 2021, el Sr. Maillot compareció ante el juez de instrucción del tribunal de primera instancia de Anosy y se ordenó su prisión preventiva en régimen de incomunicación en la cárcel de Tsiafahy, en Antananarivo.

8. La fuente explica que en la investigación contra el Sr. Maillot se produjeron numerosas violaciones de su derecho a un juicio imparcial. No obstante, el 11 de octubre de 2021, la Sala de Acusación remitió al Sr. Maillot y a otras 19 personas al tribunal penal ordinario de Antananarivo. En virtud de los artículos 265 y 266 del Código Penal, el Sr. Maillot fue acusado de pertenecer a una asociación constituida con el fin de preparar o cometer delitos contra personas y de haber participado en una conspiración establecida con el fin de preparar o cometer tales delitos, en particular urdiendo un atentado contra la vida del Jefe de Estado. Sobre la base de los artículos 87 y 89 del Código Penal, se le imputaba haber conspirado con el objetivo de atentar contra la vida del Jefe de Estado, si bien dicha conspiración no había resultado en la comisión o iniciación de ningún acto destinado a preparar la ejecución de dicho atentado. Por último, sobre la base del artículo 87 del Código Penal, el Sr. Maillot fue acusado de haber cometido un atentado con el fin de destruir o cambiar el Gobierno. Al parecer, las infracciones imputadas al Sr. Maillot se regían también por lo dispuesto en los artículos 41, 58 y 96 de la Ley núm. 69011 del Régimen de Armas, con excepción de las armas blancas, de 22 de julio de 1969.

9. El 2 de septiembre de 2021, los abogados del Sr. Maillot solicitaron la nulidad de la instrucción por presuntas violaciones del derecho a un juicio imparcial, de conformidad con el artículo 53 del Código de Procedimiento Penal. La solicitud fue desestimada. El 26 de octubre de 2021, los abogados volvieron a plantear la nulidad de las actuaciones, mediante un recurso de oposición presentado ante la Sala de Acusación, de conformidad con los artículos 239, 309, 330 y 392 del Código de Procedimiento Penal.

10. El juicio del Sr. Maillot empezó el 6 de diciembre de 2021 y el 17 de diciembre fue declarado culpable de los cargos que se le imputaban y condenado a 20 años de trabajos forzados. Tres de los coacusados también fueron declarados culpables y los otros 16 fueron absueltos. Además de los artículos mencionados, la sentencia del Tribunal Penal remitía a los artículos 22, 95, 113 y ss., 441 y ss. y 569 y ss. del Código de Procedimiento Penal y al artículo 463 del Código Penal.

11. La fuente señala que la sentencia por la que se condena al Sr. Maillot es extremadamente sucinta, ya que el análisis de los hechos imputados y de las pruebas ocupa menos de una página. Según la fuente, las únicas pruebas incriminatorias que figuraban en la decisión eran las siguientes: un documento presupuestario que el Sr. Maillot admitió haber redactado en el marco de un proyecto político, pero que negó que formara parte de los preparativos de un golpe de Estado; una carta enviada al director general de una empresa petrolera para obtener una financiación de 10 millones de euros; una grabación de una conversación entre el Sr. Maillot, su esposa y un tercero no identificado; un fusil y cartuchos encontrados durante el registro de su domicilio, y una suma equivalente a 250.000 euros hallada también durante el registro y presentada por el fiscal como destinada a financiar parcialmente la operación. Según la fuente, el Sr. Maillot explicó que el objetivo de esa suma era financiar la compra de oro por parte de su fondo de inversión para revenderlo al Banco Central de Madagascar. Durante la investigación, este indicó en varias ocasiones que todos los intercambios entre el banquero y la persona que deseaba comprar el oro en relación con esa transacción figuraban en su teléfono, que había sido incautado durante su detención. Sin embargo, no se autorizó al Sr. Maillot acceder a esas pruebas ni a presentarlas en apoyo de su defensa, ni durante la instrucción ni durante el juicio.

12. El 6 de diciembre de 2021, al inicio del juicio ante el tribunal penal, los abogados del Sr. Maillot volvieron a plantear las vulneraciones del derecho a la defensa de las que había sido objeto su cliente y solicitaron que el proceso se declarara nulo *in limine litis*. Estas objeciones fueron desestimadas por el tribunal sin ser examinadas, debido a que la solicitud de nulidad no se había planteado ante la sala de acusación mediante recurso de oposición. La fuente señala a este respecto que los abogados del Sr. Maillot habían presentado tal recurso de oposición el 26 de octubre de 2021.

13. La fuente señala que, de conformidad con los artículos 443 y 444 del Código de Procedimiento Penal, las sentencias de los tribunales penales son inapelables. Por consiguiente, las partes solo pueden interponer un recurso contra esas sentencias ante el Tribunal de Casación. La fuente señala que un recurso de casación no constituye una auténtica segunda instancia en el sentido del artículo 14 (párr. 5) del Pacto, ya que el Tribunal de Casación solo tiene competencia para examinar la aplicación de la ley por la jurisdicción inferior y no puede revisar la determinación de los hechos ni la culpabilidad de los acusados.

14. A ese respecto, la fuente indica que, el 20 de diciembre de 2021, el Sr. Maillot interpuso un recurso de casación contra la sentencia del tribunal penal ordinario que dictó su condena. El Tribunal de Casación desestimó el recurso el 26 de agosto de 2022, pero los abogados del Sr. Maillot no recibieron la copia de esa sentencia a pesar de sus numerosas solicitudes.

15. Según la fuente, el Sr. Maillot sigue recluso en régimen de aislamiento en la prisión de Tsiafahy. El 31 de agosto de 2022, el Sr. Maillot presentó una solicitud de traslado a la Dirección de Asuntos Penales e Indultos del Ministerio de Justicia de Francia, de conformidad con las disposiciones del acuerdo de cooperación entre Francia y Madagascar de 4 de junio de 1973. El 23 de enero de 2023, las autoridades francesas aprobaron el traslado del Sr. Maillot a Francia. Sin embargo, las autoridades de Madagascar siguen oponiéndose. La fuente señala que se ha llegado a un acuerdo para el traslado a Francia de otro ciudadano francés detenido y condenado en Madagascar por el mismo caso. Según la fuente, la negativa de las autoridades de Madagascar a trasladar al Sr. Maillot se debe a una voluntad política de explotar su situación en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre de 2023. En efecto, la fuente afirma que, en el marco de la campaña presidencial, la situación del Sr. Maillot fue mencionada en numerosas ocasiones por el Presidente Rajoelina, candidato a la reelección, para denunciar las tentativas de golpe de Estado que presuntamente se habían llevado a cabo en su contra. Además, las negociaciones sobre el traslado del Sr. Maillot se interrumpieron durante el período electoral.

ii) *Condiciones de detención*

16. La fuente informa de que la situación del Sr. Maillot sigue deteriorándose y que su estado de salud empeora como consecuencia de sus condiciones de detención. En efecto, el Sr. Maillot permanece recluido en régimen de aislamiento, en una celda de unos 2 m x 4 m sin ventanas. Su celda está sumida en la oscuridad la mayor parte del tiempo y está siendo grabada continuamente. El Sr. Maillot no tiene acceso a aseos ni ducha y está obligado a hacer sus necesidades directamente en su celda.

17. La fuente explica que el Sr. Maillot depende de la ayuda de su familia para alimentarse y obtener medicamentos. Al parecer, el suministro de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad es especialmente complicado, puesto que el familiar que se ocupa principalmente de suministrarlos vive en el extranjero.

18. El Sr. Maillot perdió mucho peso desde su encarcelamiento y presenta periódicamente síntomas clínicos preocupantes, como hemorragias nasales, tensión arterial anormalmente alta, rotura de vasos sanguíneos en los ojos y migrañas persistentes.

19. En diciembre de 2023, el Sr. Maillot sufrió una parálisis lateral de la cara especialmente preocupante, que le impedía hablar o comer y le causaba dificultades respiratorias. Tras la intervención de la embajada francesa ante las autoridades de Madagascar, el Sr. Maillot fue hospitalizado durante medio día antes de ser internado de nuevo. La fuente señala que, aunque en principio se ha descartado el diagnóstico de un derrame cerebral, la parálisis podría haber sido causada por los golpes propinados al Sr. Maillot durante su detención, puesto que una lesión en el tabique nasal podría haber provocado el mal funcionamiento de ciertos nervios.

20. La fuente informa de que el Sr. Maillot recibe visitas consulares con regularidad, pero que las autoridades francesas se han encontrado con la falta de cooperación de las autoridades de Madagascar y su silencio en relación con la petición de que se mejoren sus condiciones de detención y de que sea trasladado.

iii) *Análisis jurídico*

21. La fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Maillot es arbitraria y se inscribe en las categorías I, II y III.

a) *Categoría I*

22. Según la fuente, la detención del Sr. Maillot es arbitraria con arreglo a la categoría I, ya que el motivo de su privación de libertad no es conforme con la legislación nacional.

23. La fuente afirma que el Sr. Maillot fue detenido sin que la policía presentara una orden judicial, lo que contraviene los artículos 135, 206 y ss. del Código de Procedimiento Penal. Según la fuente, las condiciones de aplicabilidad del procedimiento en caso de delito flagrante con arreglo al artículo 206 del Código de Procedimiento Penal no se cumplen en este caso. Al parecer, hasta noviembre de 2021, es decir, cuatro meses después de la privación de libertad del Sr. Maillot, no se entregó a sus abogados una copia de la orden de detención. La fuente afirma que el documento es falso y contiene numerosas contradicciones e inexactitudes, así como una imitación aproximativa de la firma del Sr. Maillot.

24. Además, la fuente afirma que el Sr. Maillot no fue informado de los motivos de su detención en el momento de esta y que la detención se llevó a cabo en un idioma que el Sr. Maillot no comprendía.

25. El Sr. Maillot fue puesto bajo custodia policial sin que sus abogados supieran si la medida había sido autorizada por una autoridad judicial. Al parecer, el Sr. Maillot permaneció bajo custodia policial durante quince días, y no fue informado de la prórroga de su detención hasta que habían transcurrido diez días. A ese respecto, la fuente explica que el artículo 136 del Código de Procedimiento Penal limita la detención policial a un período de 48 horas, renovable una sola vez.

26. La fuente también señala que el Código de Procedimiento Penal prevé la posibilidad de ampliar la detención policial a 12 días en razón de la distancia que separa el lugar de detención de la sede de la investigación. No obstante, la fuente precisa que la disposición en

cuestión no es aplicable en este caso, ya que el Sr. Maillot fue detenido en su domicilio de Antananarivo, capital del país y sede de la fiscalía. La fuente alega que, de todos modos, en este caso se superaron los 12 días, ya que el Sr. Maillot permaneció en detención policial durante 15 días.

27. La fuente también señala que no hay pruebas que permitan afirmar que la detención del Sr. Maillot fuera autorizada por una autoridad judicial. Teniendo en cuenta que la detención del Sr. Maillot carece de fundamento jurídico y no fue ordenada por una autoridad judicial, la fuente afirma que es arbitraria con arreglo a la categoría I.

b) Categoría II

28. La fuente afirma que la detención del Sr. Maillot también es arbitraria con arreglo a la categoría II en la medida en que resulta del ejercicio de sus derechos a la libertad de pensamiento, expresión y reunión y de su derecho de acceso a las funciones públicas, protegidos por los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

29. La fuente explica que el Sr. Maillot era el asesor diplomático del arzobispo de Antananarivo, que según los informes es una figura destacada en Madagascar debido al importante papel de la Iglesia y sus actividades de mediación entre los diversos partidos políticos del país. La fuente señala que el arzobispo había criticado a los actuales dirigentes políticos e instado al Gobierno a adoptar más medidas para luchar contra la pobreza y la hambruna.

30. Al parecer, en 2010 se solicitó al Sr. Maillot que ejerciera de asesor del Presidente Rajoelina, lo que le otorgó cierta notoriedad en Madagascar y lo expuso a recibir presiones. Criticó abiertamente a los grupos mafiosos, sobre todo en el sector de la minería del oro, y sus tentativas de hacerse con el poder político. Al parecer, en 2011, el Sr. Maillot dimitió de su cargo, denunciando en una entrevista pública las presiones, agresiones y amenazas físicas de las que había sido objeto desde que había asumido sus funciones. Afirmó también que el Presidente era “prisionero de las luchas de poder que tienen lugar en su entorno” e hizo un llamamiento para que el país se aleje de las “lógicas personales anquilosadas”.

31. En 2019, la Oficina del Presidente Rajoelina volvió a solicitar al Sr. Maillot que contribuyera, en calidad de asesor, a la reflexión sobre la composición de un nuevo gobierno. En 2020, el autor creó un fondo de inversión destinado a estructurar el sector de la minería de oro y librarlo de las prácticas que había denunciado públicamente y calificado de mafiosas. En julio de 2021, la Oficina del Presidente solicitó de nuevo el asesoramiento del Sr. Maillot en relación con la estructura del Gobierno y las personas susceptibles de formar parte de él en calidad de ministros. Según la fuente, fue en ese período cuando el nombre del Sr. Maillot empezó a circular en la prensa y en las redes sociales como una de las personas que podía sustituir al entonces Primer Ministro, cuyas relaciones con el Presidente se habían deteriorado.

32. Según la fuente, en el ejercicio de sus funciones, el Sr. Maillot volvió a criticar la gobernanza y las políticas gubernamentales del país, y pidió al Presidente que “rompiera con la práctica del nepotismo y el favoritismo” que, según él, estaba presente en toda la administración malgache.

33. La fuente señala que la mayoría de las personas propuestas por el Sr. Maillot para componer la Oficina del Presidente también han sido detenidas. Según la fuente, el Sr. Maillot permanece detenido sin que existan pruebas materiales de su implicación en ningún delito, y su detención es un pretexto para apartarlo de la esfera política y castigar su postura pública, crítica con el gobierno actual. La fuente señala que estos aspectos fueron planteados por la defensa durante el juicio del Sr. Maillot ante el tribunal penal.

34. Por consiguiente, la fuente afirma que la detención del Sr. Maillot resulta del ejercicio de sus derechos a la libertad de pensamiento, expresión y reunión y de su derecho de acceso a las funciones públicas, protegidos por los artículos 18 a 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La fuente concluye que la privación de libertad del Sr. Maillot es arbitraria con arreglo a la categoría II.

## c) Categoría III

35. Según la fuente, la detención del Sr. Maillot es arbitraria con arreglo a la categoría III, ya que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a ser oído por un tribunal independiente.

36. La fuente afirma que, al día siguiente de la detención del Sr. Maillot, el asesor diplomático del Presidente concedió una entrevista en la que relató la detención del Sr. Maillot e indicó que este había “confesado”. No obstante, la fuente afirma que el Sr. Maillot aún no había sido interrogado ni informado de las acusaciones en su contra. La fuente añadió que el Sr. Maillot siempre ha negado los cargos que se le imputan.

37. Además, el 8 de agosto de 2021, menos de 20 días después de la detención del Sr. Maillot, el Presidente declaró lo siguiente en un discurso:

“Ya he recibido un informe sobre el contenido del plan Apolo 21. El Apolo 21, como todos sabemos, y como señaló el Fiscal General de la República, contiene una solicitud de financiación para patrocinar el plan destinado a desestabilizar el Estado y el país entero y asesinar a algunas de las personas más importantes del país”.

38. Cuando se le preguntó sobre la presunción de inocencia, el Presidente realizó declaraciones particularmente hostiles y vehementes contra el Sr. Maillot.

39. Según la fuente, esas declaraciones reflejan la injerencia del Jefe de Estado en los procedimientos judiciales en curso y ponen en peligro la independencia del poder judicial y el estado de derecho. La fuente sostiene asimismo que las declaraciones particularmente hostiles y vehementes del Presidente contra el Sr. Maillot vulneran el derecho de este último a la presunción de inocencia. A ese respecto, la fuente añade que, tras ese discurso y en respuesta a las declaraciones del Presidente, los presidentes del Senado y de la Asamblea Nacional de Madagascar y varios dirigentes de partidos pidieron que se condenara severamente al Sr. Maillot. Estas declaraciones se realizaron ante las televisiones locales y los abogados del Sr. Maillot las presentaron ante el tribunal penal. Además, justo después de la detención del Sr. Maillot, la Fiscal General, que depende jerárquicamente del poder ejecutivo, afirmó que este era culpable de los cargos que se le imputaban y declaró que los acusados habían “ideado un plan para eliminar y neutralizar a diversas personalidades malgaches, entre ellas el Jefe de Estado”.

40. La fuente también afirma que el Sr. Maillot no fue informado de los motivos de su detención hasta tres días después de ser detenido, el 23 de julio de 2021, durante su primer interrogatorio. Al parecer, no pudo hablar con sus abogados hasta tres días después de su detención. La fuente afirma que, durante los 15 días que el Sr. Maillot permaneció detenido, las autoridades encargadas de la investigación ordenaron que se instalasen micrófonos y cámaras en la sala de visitas, por lo que este no pudo hablar libremente con sus abogados. Además, una vez que se envió al Sr. Maillot a prisión preventiva, todas las reuniones con sus abogados se celebraron en presencia de dos funcionarios de prisiones y se limitaron a diez minutos de duración. La fuente añade que los abogados del Sr. Maillot no han recibido copia del expediente de la investigación ni de las pruebas contra su cliente. Una vez cerrada la investigación, solo se les permitió hacer una lectura rápida del expediente y nunca han recibido una copia.

41. La fuente afirma también que, al finalizar los interrogatorios, al Sr. Maillot no se le permitió modificar las transcripciones escritas de sus declaraciones y tuvo que firmarlas a pesar de que no coincidían con sus palabras. Según la fuente, la investigación se llevó a cabo exclusivamente sobre la base de la acusación, y los responsables de la investigación se negaron a escuchar a los actores clave en el caso que podían testificar a favor de los acusados o contradecir los cargos que se les imputaban, así como a realizar careos entre los acusados y a presentar pruebas materiales exculporias.

42. Por último, la fuente afirma que, durante el juicio, el fiscal presentó pruebas falsificadas: una imitación de la firma del Sr. Maillot, archivos informáticos con fechas que no se correspondían y una grabación de audio anónima que presuntamente había sido editada y que la Fiscalía General había reconocido como irregular. Además, el fiscal supuestamente no presentó las pruebas materiales inculporias enunciadas en el escrito de acusación. La fuente añadió que uno de los coacusados se había retractado de sus declaraciones

anteriores, afirmando que las había hecho tras recibir presiones de las autoridades para testificar contra el Sr. Maillot.

43. Según la fuente, uno de los documentos en los que se falsificó la firma del Sr. Maillot era una carta de fecha 12 de octubre de 2020 que supuestamente el Sr. Maillot había enviado al Director General del Grupo Benchmark, accionista mayoritario de Madagascar Oil S.A., para solicitar financiación por valor de 10 millones de euros. El Sr. Maillot impugnó formalmente la veracidad de este documento y la autenticidad de su firma. Un antiguo alto funcionario del Gobierno, que también es asesor estratégico del Benchmark Group, impugnó también la autenticidad de este documento.

44. En cuanto a los archivos informáticos presentados, la fuente explica que, durante la vista, el fiscal acusó al Sr. Maillot de haber redactado un plan de golpe de Estado y de haberlo compartido con otra persona en mayo de 2021. Estas alegaciones se basaban en un archivo informático cuyos metadatos revelaban, en realidad, tres fechas de creación diferentes, dos en junio de 2021, es decir, con posterioridad a los hechos denunciados por el fiscal, y una en agosto de 2021, es decir, una vez encarcelado el Sr. Maillot. Además, el Sr. Maillot declaró en la vista, aportando documentación probatoria, que en marzo de 2021 había roto su relación con la persona mencionada.

45. Además, la fuente señala que, durante la fase de instrucción, el Sr. Maillot denunció que no había acta del registro realizado en su domicilio. Durante el juicio, la fiscalía presentó un acta presuntamente firmada por el Sr. Maillot. Este último declaró formalmente que no había firmado ese documento y que su firma había sido imitada burdamente. A ese respecto, la fuente señala que el registro se llevó a cabo el 21 de julio de 2021, es decir, al día siguiente de la detención del Sr. Maillot y cuando este no estaba presente.

46. La fuente concluye que la inobservancia de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad del Sr. Maillot el carácter de arbitraria con arreglo a la categoría III.

## **b) Respuesta del Gobierno**

47. El 29 de febrero de 2024, el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno una comunicación relativa al Sr. Maillot en la que le solicitaba que facilitase información detallada sobre la situación de este, a más tardar el 29 de abril de 2024, y le instaba a garantizar su integridad física y mental.

48. De conformidad con el párrafo 16 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, el Gobierno solicitó una prórroga del plazo, que le fue concedida. El plazo se pospuso hasta el 29 de mayo de 2024. El Gobierno presentó una respuesta el 18 de junio de 2024, es decir, fuera del plazo establecido. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo no puede aceptarla como si se hubiera presentado a tiempo.

## **2. Examen**

49. Ante la falta de respuesta del Gobierno en el plazo establecido, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

50. Para determinar si la privación de libertad del Sr. Maillot es arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia sobre la manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones<sup>2</sup>. La mera afirmación por el Gobierno de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las presunciones de la fuente<sup>3</sup>. En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar oportunamente las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

<sup>2</sup> A/HRC/19/57, párr. 68.

<sup>3</sup> *Ibid.*

51. La fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Maillot es arbitraria y se inscribe en las categorías I, II y III. El Grupo de Trabajo procederá a examinar cada una de las categorías por separado.

**a) Categoría I**

52. Según la fuente, el Sr. Maillot no fue informado de los motivos de su detención hasta tres días después de ser detenido. Además, al parecer las autoridades lo detuvieron y registraron su domicilio sin presentarle una orden de detención o registro.

53. El Grupo de Trabajo recuerda que, con arreglo al artículo 9, párrafo 2, del Pacto, toda persona detenida no solo debe ser informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, sino también notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. Como ha señalado el Grupo de Trabajo, para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico, no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso<sup>4</sup>. Esto suele hacerse mediante una orden de detención o de aprehensión, o un documento equivalente<sup>5</sup>. Los motivos deben facilitarse inmediatamente después de la detención, y deben incluir no solo la base jurídica general de la detención, sino también suficientes datos concretos que indiquen el fondo de la denuncia, como el hecho ilícito y la identidad de la presunta víctima<sup>6</sup>.

54. El Grupo de Trabajo observa que, en este caso, la detención del Sr. Maillot se llevó a cabo en un idioma que no comprendía, lo que le impidió ser informado de los motivos de su detención, en contravención directa del principio 14 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Además, sobre la base de la información de que dispone, el Grupo de Trabajo no puede concluir que el Sr. Maillot fuera detenido en el marco de un procedimiento de flagrante delito, durante el cual generalmente no es posible obtener una orden judicial. En tales circunstancias, el Grupo de Trabajo concluye que se ha infringido el artículo 19 (párr. 2) del Pacto.

55. El Grupo de Trabajo recuerda, asimismo, una norma bien establecida del derecho internacional: la prisión preventiva no debe ser la regla sino la excepción, y debe ordenarse por el período de tiempo más breve posible<sup>7</sup>. El artículo 9 (párr. 3) del Pacto dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales. De ahí que la libertad se reconozca como principio y su privación, como excepción en aras de la justicia<sup>8</sup>. En este caso, el Sr. Maillot permaneció en detención preventiva durante 15 días y no fue informado de la prórroga de su detención hasta transcurridos 10 días, es decir, un tiempo muy superior al período de 48 horas, renovable una vez, que establece la ley. Según la fuente, la posibilidad de prolongar la detención a 12 días prevista en la ley no es aplicable en este caso y, de todos modos, no se abordó en la respuesta del Gobierno. Además, teniendo en cuenta que no se han refutado las alegaciones de que el Sr. Maillot fue detenido el 20 de julio de 2021 y no compareció ante un juez hasta el 4 de agosto de 2021, el Grupo de Trabajo considera que se ha violado el derecho a ser llevado sin demora ante una autoridad judicial que asiste al Sr. Maillot en virtud del artículo 9 (párr. 3) del Pacto.

56. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que las autoridades violaron los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 9 del Pacto, y los principios 4, 10, 11, 14, 37 y 38 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, la detención del Sr. Maillot es arbitraria y se inscribe en la categoría I.

<sup>4</sup> Opiniones núms. 9/2019, párr. 29; 46/2019, párr. 51; y 59/2019, párr. 46.

<sup>5</sup> Véase, por ejemplo, la opinión núm. 4/2023, párr. 64.

<sup>6</sup> Opinión núm. 71/2021, párr. 64.

<sup>7</sup> Opiniones núms. 28/2014, párr. 43; 49/2014, párr. 23; 1/2020, párr. 53; 8/2020, párr. 54; y 66/2023, párr. 48.

<sup>8</sup> [A/HRC/19/57](#), párr. 54.



**b) Categoría II**

57. La fuente alega que la detención del Sr. Maillot también es arbitraria con arreglo a la categoría II, puesto que resulta del ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de pensamiento, expresión y reunión y de su derecho de acceso a las funciones públicas, protegidos por los artículos 18 a 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A este respecto, la fuente señala que el Sr. Maillot asesoró al Gobierno en varias ocasiones, en particular sobre nombramientos ministeriales. Al parecer, tras recibir numerosas amenazas y agresiones, el Sr. Maillot dimitió de su cargo y, posteriormente, la mayoría de las personas que había propuesto para formar parte de la Oficina del Presidente fueron detenidas bajo acusaciones similares.

58. Sobre la base de los datos que se le han facilitado, el Grupo de Trabajo considera que no dispone de información suficiente para concluir que la detención y posterior condena del Sr. Maillot fueron consecuencia del ejercicio de sus derechos y libertades garantizados por los artículos 18 a 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

**c) Categoría III**

59. La fuente afirma que la detención del Sr. Maillot es arbitraria con arreglo a la categoría III a causa de la vulneración de su derecho a un juicio imparcial, en particular su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a ser oído por un tribunal independiente.

60. El Grupo de Trabajo recuerda que el artículo 14 (párr. 3 a)) del Pacto garantiza el derecho de toda persona a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. La fuente afirma que el Sr. Maillot no fue informado de los motivos de su detención hasta tres días después de esta; al parecer fue entonces cuando se le permitió por primera vez comunicarse con sus abogados. Además, el derecho del Sr. Maillot a comunicarse libremente con su abogado se vio comprometido por la instalación de cámaras y micrófonos en la sala de visitas y por el hecho de que sus conversaciones se limitaron a diez minutos.

61. El Grupo de Trabajo recuerda que, con arreglo al principio 8 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, a toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial, lo que constituye un elemento importante del derecho a la defensa. El derecho de una persona acusada a mantener conversaciones privadas con su abogado, sin vigilancia, constituye uno de los aspectos fundamentales de un juicio imparcial. Impedir que un abogado se entreviste con su cliente y obtenga instrucciones confidenciales anula en gran medida la finalidad de la asistencia jurídica. A este respecto, el Comité de Derechos Humanos destacó que el abogado debe poder reunirse con su cliente en privado y comunicarse con la persona acusada en condiciones que respeten plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones y, además, el abogado debe poder asesorar a las personas acusadas de un delito sin ningún tipo de restricción, influencia, presión o injerencia indebida<sup>9</sup>.

62. Tomando nota del principio 18 (párr. 3) del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y de la regla 61 (párr. 1) de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), que disponen que los acusados deben tener acceso a asistencia jurídica sin demora, el Grupo de Trabajo concluye que el Sr. Maillot fue privado de representación letrada efectiva, en contravención del artículo 14 (párr. 3 b)) del Pacto, así como de la regla 61 (párr. 1) de las Reglas Nelson Mandela y del principio 18 (párr. 3) del Conjunto de Principios.

63. La fuente afirma que se han violado los derechos del Sr. Maillot a la presunción de inocencia y a ser oído por un tribunal independiente. Para respaldar su afirmación, la fuente señala que el fiscal presentó pruebas falsificadas, falsificó la firma del Sr. Maillot y alteró

<sup>9</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 34. Véanse también los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, párr. 16; [A/HRC/45/16](#), párr. 54; y las opiniones núms. 29/2017, 32/2017, 34/2017, 36/2017, 70/2017, 66/2019 y 70/2021.

grabaciones de audio. El Sr. Maillot declaró que tenía en su poder conversaciones telefónicas que podían exculparlo, pero no se le autorizó acceder a esas pruebas para apoyar su defensa. Además, al parecer, algunos representantes del Gobierno habían afirmado en declaraciones públicas que el Sr. Maillot era culpable incluso antes del comienzo de su juicio, comprometiendo el principio de la presunción de inocencia. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya refutado esas alegaciones.

64. Además, el acceso al expediente del Sr. Maillot no se concedió hasta después de que se cerrara la investigación, y sus abogados nunca recibieron una copia. El Grupo de Trabajo recuerda que, en principio, el expediente debe poder consultarse desde el primer momento<sup>10</sup>. Toda persona privada de libertad tiene derecho a acceder al material relacionado con su privación de libertad<sup>11</sup>. Sin embargo, ese derecho no es absoluto, y la divulgación de información puede ser restringida si tal restricción es necesaria y proporcionada para alcanzar un objetivo legítimo, como la protección de la seguridad nacional, y si el Estado ha demostrado que con medidas menos restrictivas no se podría lograr el mismo resultado, por ejemplo con la presentación de resúmenes de información en los que se señale claramente el fundamento de hecho de la detención<sup>12</sup>. El Gobierno no aportó ninguna justificación para denegar el acceso al expediente. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que las autoridades violaron el derecho del Sr. Maillot a un juicio imparcial, su derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, y su derecho a la presunción de inocencia, consagrados en los artículos 10 y 11 (párr. 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 (párrs. 1, 2 y 3 b) y e)) del Pacto.

65. El artículo 14 (párr. 5) del Pacto dispone que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. La fuente sostiene que se vulneró este derecho, ya que las sentencias de los tribunales penales no pueden apelarse con arreglo a la legislación de Madagascar. El Sr. Maillot presentó un recurso de casación ante el Tribunal de Casación, que solo tiene competencia para examinar la aplicación de la ley por la jurisdicción inferior y no puede revisar la determinación de los hechos ni la culpabilidad de los acusados. El Grupo de Trabajo recuerda que el derecho de una persona declarada culpable de un delito a someter su caso a revisión por un tribunal superior no es absoluto y puede ser restringido. No obstante, ante la falta de explicaciones del Gobierno, el Grupo de Trabajo concluye que se ha vulnerado el artículo 14 (párr. 5) del Pacto.

66. En vista de lo anterior, y a falta de una respuesta detallada del Gobierno que aborde el fondo de las alegaciones formuladas por la fuente, el Grupo de Trabajo concluye que las violaciones del derecho del Sr. Maillot a un juicio imparcial son de una gravedad tal que confieren a su privación de libertad carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

#### **d) Observaciones finales**

67. El Grupo de Trabajo toma nota de las alegaciones de la fuente, no refutadas por el Gobierno, de que el Sr. Maillot está recluso en régimen de aislamiento desde 2021, y es grabado continuamente. El Grupo de Trabajo aprovecha esta oportunidad para recordar al Gobierno las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 (párr. 1) del Pacto, que dispone que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano<sup>13</sup>. Además, también recuerda que el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes consideró que el régimen de aislamiento prolongado más allá de 15 días, durante los cuales algunos de los efectos psicológicos nocivos del aislamiento pueden llegar a ser irreversibles, podía equivaler a tortura<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Véanse las opiniones núms. 78/2019; 29/2020; 67/2020; 77/2020 y 83/2021.

<sup>11</sup> Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), principio 2 y directrices 11 y 13.

<sup>12</sup> *Ibid.*, directriz 13, párrs. 80 y 81.

<sup>13</sup> Opiniones núms. 46/2020, párr. 64; y 66/2020, párr. 66.

<sup>14</sup> A/63/175, párr. 56; y A/66/268, párr. 61.

### 3. Decisión

68. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Paul Maillot es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I y III.

69. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Madagascar que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Maillot sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto.

70. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Maillot inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

71. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Maillot y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

72. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

### 4. Procedimiento de seguimiento

73. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Maillot y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Maillot;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Maillot y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Madagascar con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

74. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

75. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

76. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la

situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>15</sup>.

*[Aprobada el 30 de agosto de 2024]*

---

---

<sup>15</sup> Resolución 51/8 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 6 y 9.